

Expte. n° 8353/11 “Garmendia,
Olga Beatriz c/ GCBA s/ revisión
cesantías o exoneraciones de
emp. públ. s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”

Buenos Aires, 11 de julio de 2012

Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe,

resulta:

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) interpuso recurso extraordinario federal (fs. 308/319) contra la sentencia de este Tribunal de fecha 11 de abril de 2012 que resolvió “[d]eclarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (fs. 301/303, el resaltado pertenece al texto original).

El recurso fue contestado por la parte actora, que solicitó su rechazo (fs. 322/323 vuelta).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso extraordinario federal articulado por el GCBA no puede ser admitido.

2. La decisión del Tribunal —adoptada por mayoría— que ahora se cuestiona declaró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad que dedujera el GCBA, en tanto consideró que no se había logrado acreditar que los planteos allí esgrimidos versasen acerca de la interpretación o aplicación de normas constitucionales, conforme lo exige el artículo 113, inciso 3º de la CCABA. Es por ello que resulta aplicable en el caso la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las decisiones por las cuales los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos de orden local que se interponen ante ellos son ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria (cf. *Fallos*: 306:885; 308:1577; 311:100; 329:4775; entre muchos otros).

3. Es posible advertir, también, que las objeciones formuladas remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y a la interpretación

de normas de naturaleza infraconstitucional (derecho público local y derecho común) involucradas en la causa *sub examine*, en la que se ventilaron aspectos referidos a la relación de empleo público que vinculó a Olga Beatriz Garmendia con el GCBA, en particular los relativos al cese dispuesto por el Gobierno local. Los agravios de la demandada giraron, básicamente, en torno de los montos indemnizatorios que le fueron acordados en concepto de daños materiales y morales que se consideraron acreditados y que habrían tenido origen en la actuación estatal declarada ilegítima por la alzada. Y sabido es que estas cuestiones, como principio, resultan ajenas a la instancia extraordinaria que se reclama.

Al respecto, nuestro Alto tribunal ha sostenido en numerosas ocasiones que lo atinente al análisis de los hechos y a la interpretación y aplicación de normas no federales constituyen cuestiones propias de los jueces de la causa y ajenas, como principio, al recurso extraordinario (doctrina de *Fallos*: 271:123; 296:712; 297:140; 302:892; entre otros); y también ha señalado que las relaciones entre empleados públicos locales y el gobierno del que dependen se rigen por las respectivas disposiciones de orden local que constituyen el derecho administrativo aplicable, de modo que la interpretación de las normas respectivas resulta, por regla, privativa de sus tribunales (cf. doctrina de *Fallos*: 298:452; 303:801; 304:1345; 305:194, 465; 308:1922; entre otros).

4. A lo antes apuntado debe sumarse que la invocación genérica que efectúa el recurrente de diversos preceptos de raigambre constitucional (derecho de defensa, principio de legalidad y atribuciones exclusivas del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) no resulta suficiente para justificar la existencia de una cuestión federal, pues es menester demostrar fundadamente la relación directa e inmediata de tales normas con lo efectivamente decidido en autos, conforme lo exige el artículo 15 de la ley nº 48; circunstancia que tampoco, en esta oportunidad, se comprueba. En este sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que no procede el recurso extraordinario que, aunque invoca presuntos quebrantamientos a principios y garantías constitucionales, sólo plantea cuestiones de derecho local que no guardan relación directa e inmediata con los artículos invocados de la Constitución nacional (doctrina de *Fallos*: 300:130).

5. Por su parte, respecto de los planteos efectuados por el GCBA orientados a denunciar la *arbitrariedad de la sentencia* objetada, núcleo central de la pieza recursiva, entiendo que, por regla general, no corresponde al tribunal emisor del fallo objetado pronunciarse respecto de la invocada arbitrariedad de su decisorio; y, por lo demás, a partir de

los términos en que ha sido concebido el recurso en el *sub lite*, no se justifica aquí hacer excepción a la regla por no advertirse relación directa entre lo decidido y los principios, derechos y garantías constitucionales agitados en esta apelación extraordinaria.

Ello, desde ya, no impide recordar que la admisibilidad del recurso por esta causal es estricta pues, según lo señala el Alto tribunal federal, *“(l)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia, ni corregir fallos equivocados (...), sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional”* (Fallos: 312:246; 389, 608; 323:2196, entre otros).

6. Tampoco la gravedad institucional que invoca el GCBA (fs. 310 vuelta y a fs. 311 vuelta: alude a *“trascendencia institucional”*), permitiría la concesión del remedio federal intentado, porque no solo no alcanza a demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso incidiría sobre los intereses de la comunidad o principios institucionales básicos de la Constitución Nacional (cf. CSJN, Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240), sino que conforme lo tiene dicho la CSJN *“la invocación de gravedad institucional no puede sustituir la inexistencia de cuestión federal que exige el art. 100 de la Constitución Nacional”* (Fallos 311:121).

7. Finalmente, el recurrente no ha dado cumplimiento acabado a los recaudos señalados en los artículos 2º, 3º y 8º del reglamento aprobado por la Acordada nº 4/2007 de la CSJN y artículo 2º de la Acordada nº 38/2011 de la CSJN.

Así, omitió efectuar en la carátula (art. 2º, Acordada nº 4/2007) la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal (inciso i). Además, el escrito no consigna (ni podía hacerlo por la índole de la cuestión decidida) *“la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas”* (art. 3º, inciso d), ni la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas (art. 3º, inc. e).

El GCBA incumple, también, con la carga de transcribir o acompañar la totalidad de las normas locales a las que hizo referencia en el recurso interpuesto (art. 8º).

8. Por los motivos expuestos, corresponde denegar el recurso extraordinario federal deducido por el GCBA. Las costas se imponen a la parte vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota y por no mediar, en esta ocasión, circunstancias que justifiquen apartarse de él (art. 68, CPCCN).

Los jueces José Osvaldo Casás y Ana María Conde dijeron:

Adherimos al voto de nuestra colega, la jueza Alicia E. C. Ruiz.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Comparto la solución que propicia mi colega, la jueza de trámite Alicia E. C. Ruiz. Ello así, toda vez que, tal como lo indica en los puntos 2, 3, 4 y 5 de su voto, a los que me remito, los agravios esgrimidos por la parte recurrente no involucran ninguna cuestión federal que habilite, de acuerdo con las exigencias del artículo 14 de la ley nº 48, la instancia extraordinaria de la CSJN. Costas a la vencida (art. 68 CPCCN).

Por ello,

**el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:**

1. Denegar el recurso extraordinario federal planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita como está ordenado a fs. 303, punto 2.

**Expte. n° 8353/11 “Garmendia,
Olga Beatriz c/ GCBA s/ revisión
cesantías o exoneraciones de
emp. públ. s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”**